

SESIONES

DE LA

DIPUTACION PERMANENTE DE CORTES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MARTINEZ BARRIO

Sesión del jueves 30 de Diciembre de 1937

SUMARIO

Abierta la sesión a las doce y veinte minutos, se lee y aprueba el acta de la anterior.

Salutación enviada por el Sr. Just al entrar en Teruel: telegrama.

Designación como Vocales de la Diputación Permanente de los Sres. Diputados D. Federico Martínez Miñana y D. Juan Peset; del Sr. Sapiña, como Vocal suplente del Sr. Muñoz de Zafra en la Comisión de suplicatorios, y del Sr. Lorenzo Santiago como Vocal suplente del Sr. Moreno Mateo, también en la Comisión de suplicatorios: comunicaciones.—Indicaciones del Sr. Presidente.

Jurisdicción que ha de juzgar a los Sres. Diputados cuyos suplicatorios han sido concedidos: escrito del presidente del Tribunal Supremo aclarando el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de dicho Alto Tribunal en 15 de Octubre último.—Manifestaciones del Sr. Presidente.

ORDEN DEL DIA.—Suplicatorio para proceder contra el Diputado D. Cayetano Bolívar: dictamen. Intervención del Sr. Montiel.—Manifestaciones de los Sres. Prat y Lamonedá.—Intervención del señor Presidente.—Contestación del Sr. Prat.—Se

aprueba el dictamen con el voto en contra de los representantes del grupo parlamentario socialista.

Suplicatorio para proceder contra el Diputado a Cortes D. Luis Lucia Lucia: dictamen.—Propuesta del Sr. Velao interesando el aplazamiento del debate.—Contestación del Sr. Presidente.—Nueva intervención del Sr. Velao.—Manifestaciones de los Sres. Lamonedá y Presidente.—Es aprobada la propuesta del Sr. Velao.

Se suspende la sesión a las doce y cincuenta minutos, para continuarla mañana a las doce.

Se reanuda la sesión a las doce y quince minutos del día 31 de Diciembre de 1937.

Se pone a discusión el dictamen de la Comisión de suplicatorios denegatorio del solicitado para proceder contra el Diputado D. Luis Lucia y Lucia. Intervención del Sr. Lamonedá, en la que formula, verbalmente, voto particular al dictamen en el sentido de que el suplicatorio sea concedido. Intervenciones de los Sres. Corominas, Fernández Clérigo, Velao, Torres Campaña y Montiel.—Rectificaciones de los Sres. Corominas y Fernández Clérigo.—Se aprueba el voto particular y se desecha el dictamen.

Se levanta la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos.

Abierta la sesión a las doce y veinte minutos, en segunda convocatoria, con asistencia de los señores Torres Campaña, Corominas, Pascual León, Santaló, Jáuregui, Tejero, Palomo, Velao, Montiel, Lamonedá, González Peña, Araquistáin, Vargas, Fernández Clérigo, Domingo y Prat, se leyó y fué aprobada el acta de la anterior.

Leído un telegrama de salutación que el señor Diputado D. Julio Just envía al entrar en Teruel, dijo

El Sr. PRESIDENTE: Se hará constar en acta."

Leída una comunicación de la minoría de Izquierda Republicana en que se designa como vocales suplentes de la Diputación Permanente a los Diputados D. Federico Martínez Miñana y don Juan Peset, para sustituir a los titulares D. Luis Fernández Clérigo y D. Pedro Vargas, respectivamente, dijo

El Sr. PRESIDENTE: Surtirá los efectos oportunos."

Se leyó también una comunicación del grupo parlamentario socialista designando al Diputado

D. Juan Sapiña Camaró vocal suplente del señor Muñoz de Zafra en la Comisión de suplicatorios, en sustitución del Sr. D. Miguel Villalta.

El Sr. **PRESIDENTE**: Esta comunicación surtirá asimismo los efectos correspondientes."

Leída otra comunicación del grupo parlamentario socialista designando al Diputado D. Edmundo Lorenzo Santiago vocal suplente de don Mariano Moreno Mateo en la Comisión de suplicatorios, en sustitución de D. Angel Galarza Gago, dijo.

El Sr. **PRESIDENTE**: De igual manera surtirán los debidos efectos."

Leído un escrito del presidente del Tribunal Supremo, con referencia a la jurisdicción que ha de entender en el procedimiento contra los señores Diputados, en el que se hacen determinados esclarecimientos en relación con el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en 15 de Octubre próximo pasado y se consigna la coincidencia de su criterio con el sustentado por la Diputación Permanente en la sesión última, dijo.

El Sr. **PRESIDENTE**: Se concede la palabra sobre este asunto. **(Pausa.)** ¿Ningún Sr. Diputado desea usar de la palabra? **(Pausa.)**

Como, en realidad, la comunicación del señor presidente del Tribunal Supremo viene a allanarse a lo que tenía resuelto la Diputación Permanente sobre el particular, se le acusará recibo, expresando nuestra satisfacción por el hecho de que sea coincidente el criterio del Tribunal con el que la Diputación Permanente reiteradamente ha sostenido."

ORDEN DEL DIA

Leído el dictamen de la Comisión de suplicatorios proponiendo la denegación del solicitado para proceder contra el Diputado D. Cayetano Bolívar Escribano, dijo.

El Sr. **MONTIEL**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **MONTIEL**: Dos palabras, en representación de la minoría comunista, para pedir a la Diputación Permanente que apruebe el dictamen de la Comisión de suplicatorios tal como viene.

En realidad, el asunto es tan sencillo, que no creo sean necesarias muchas explicaciones para demostrar en absoluto la razón que tiene la Comisión de suplicatorios para emitir este dictamen.

Nuestro camarada Bolívar era comisario político en Málaga, y el a que se refiere esta petición de suplicatorio es un proceso en el que se van a investigar responsabilidades de índole militar. Y es natural que quien no ejercía funciones de mando militar, como dice el dictamen de la Comisión de suplicatorios, no podía incurrir en responsabilidades de esta índole.

En los antecedentes que ha examinado la Comisión de suplicatorios no hay ningún cargo contra nuestro camarada Bolívar, no hay ningún hecho, ningún indicio que pueda llevar al ánimo de nadie la sospecha de que nuestro camarada Bolívar haya podido incurrir en responsabilidad criminal de ningún orden. Han comparecido ante

la Comisión diversos testigos, algunos de los cuales formaban parte del Comité de Milicias de Málaga. Se ha demostrado ante la Comisión que nuestro camarada Bolívar, en sus actuaciones durante el ejercicio de su cargo, obró siempre de acuerdo con ese Comité de Milicias. Por ejemplo, en cuanto a nombramiento de comisarios, de delegados políticos, nuestro camarada Bolívar, en todos los aspectos de su función, procedió siempre de acuerdo con el Comité de Milicias, lo cual supone que ni siquiera en este terreno exclusivamente político ha incurrido en ningún exceso, en ningún abuso, que pueda haber producido, como consecuencia, un perjuicio, una perturbación en la marcha de las operaciones y en el conjunto de la defensa de aquella ciudad.

Por estas razones, no habiendo ningún cargo contra él, no pudiendo existir contra él la sospecha de una responsabilidad de carácter militar ni de ninguna clase, es por lo que nosotros pedimos que la Diputación Permanente acuerde la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de suplicatorios.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Desea intervenir algún otro Sr. Diputado?

El Sr. **PRAT**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **PRAT**: En nombre de la minoría socialista, para hacer presente nuestra opinión y nuestro voto contrario al dictamen que ha sido leído por el señor oficial mayor.

Al manifestar aquí nuestra decisión, no entramos, en absoluto, en el fondo de la cuestión, en los indicios que puedan haber servido de fundamento para que el juez haya pedido a las Cortes la concesión de suplicatorio para procesar al Sr. Bolívar.

Entendemos que nuestro compañero de Diputación Sr. Bolívar, al qué guardamos todos los respetos de índole personal, y yo he de añadir además mis afectos también personales; nosotros, que estuvimos en las Cortes Constituyentes del 33, que hemos seguido en éstas y conocemos su generosidad de espíritu y su devoción a la causa que defendemos, entendemos, repito, que el señor Bolívar desempeñaba un cargo de comisario en el frente de Málaga. Este cargo, como todos los comisarios de guerra, pertenecen a una organización de carácter militar, creada por el Ministerio de la Guerra, dependiente hoy del Ministerio de Defensa Nacional, con una regulación, con un funcionamiento de carácter militar. Ha querido el Ministerio de la Guerra sustituir, al lado de los mandos puramente militares, unos mandos de carácter políticomilitar; pero es lo cierto que ha sido el Ministerio de la Guerra el que los ha constituido; que es el Ministerio de la Guerra el que les da sus normas de actuación; que se deben a su disciplina, e incluso en su contribución dependen económicamente del Ministerio de la Guerra.

Y el problema que en el caso del Sr. Bolívar surge es éste: que el Sr. Bolívar, nuestro compañero de Diputación, si no hubiese sido Diputado a Cortes, probablemente hubiera sido procesado,

como fueron procesados diversos militares en esta causa. Vivimos en unas circunstancias extraordinariamente excepcionales, las cuales han hecho que los Diputados, excediéndose, tal vez, en el cumplimiento de su deber como Diputados, hayan ido a ofrecerse al Gobierno y hayan aceptado cargos que no son parlamentarios, pero que significan una colaboración entusiasta, con peligro de su vida, incluso, en defensa de la República, que mantiene una lucha tan cruenta como la presente. Y éste es el caso del Sr. Bolívar. El fuero parlamentario, que significa objetivamente una protección al Parlamento, subjetivamente puede significar un privilegio. La circunstancia de ser parlamentario ha de impedir que las responsabilidades de orden militar que puedan surgir—no afirmamos que existan, porque el órgano que ha de declararlo, en todo caso, no somos nosotros, sino un órgano judicial—puedan ser depuradas, y nosotros estimamos que en los momentos presentes, en que todos estamos dedicados a la defensa de la República por medio de las armas, tenemos que extremar cuidadosamente el celo del sentido de la responsabilidad y tenemos que dejar abierta la vía judicial para que ésta declare, con la firmeza que le corresponde, si existe o no responsabilidad; que lo que subjetivamente puede ser un privilegio no exista en la actuación del Ejército de la República.

Nosotros, en este caso, nos vemos obligados a pedir la concesión del suplicatorio de nuestro compañero Sr. Bolívar, y, por consiguiente, a votar en contra del dictamen. Pudiera parecer que hay una situación de privilegio entre aquellos comisarios de guerra que son Diputados y aquellos otros que no lo son. Nosotros estimamos que el Parlamento debe dar el ejemplo al país de que no exista tal privilegio. Nosotros no entramos a juzgar si el Sr. Bolívar ha cometido o no actos que puedan ser dignos de sanción. A nosotros nos basta con que se haya pedido su suplicatorio, para que esto lo esclarezcan los órganos competentes. Nosotros llamamos la atención sobre esto. No se trata de decidir "a priori", estableciendo un prejuicio a favor o en contra del Sr. Bolívar; se trata, simplemente, de estimar que, tratándose de hechos de carácter militar, de la significación y de la importancia que todos los hechos militares en estos momentos tienen, el fuero parlamentario no puede ser un obstáculo para que la depuración judicial se realice.

Estos son los motivos por los cuales la minoría socialista vota en contra del dictamen de la Comisión de suplicatorios, puesto que es partidaria de la concesión del mismo. Y nada más.

El Sr. LAMONEDA: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. LAMONEDA: Simplemente para hacer constar que, por las mismas razones que ha expuesto el Sr. Prat, los vocales socialistas de la Comisión de suplicatorios no suscribieron el dictamen.

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Prat ¿pide votación nominal para la aprobación del dictamen?

El Sr. PRAT: Si a mis compañeros de representación les parece bien unir su voto a lo que

yo he expuesto, no creo necesaria la votación nominal, con tal de que conste en acta.

El Sr. PRESIDENTE: ¿Se aprueba el dictamen, con el voto en contra de los representantes del grupo parlamentario socialista, que son los Sres. Araquistáin, González Peña, Lamonedada y Prat? (**Asentimiento.**) Queda aprobado."

Leído otro dictamen de la Comisión de suplicatorios proponiendo la denegación del solicitado para proceder contra el Diputado a Cortes don Luis Lucia y Lucia, dijo:

El Sr. PRESIDENTE: Se abre discusión sobre el dictamen leído.

El Sr. VELAO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. VELAO: En nombre de los representantes de Unión Republicana, de Esquerra Republicana y de Izquierda Republicana, yo rogaría al Sr. Presidente y a la Diputación Permanente que se aplazase la discusión de este asunto hasta otro día. La necesidad imperiosa en que nos encontramos de contrastar, entre unos y otros, elementos de juicio que quizá no hayan pesado bien en el curso de los trabajos de la Comisión de suplicatorios—trabajos de los cuales, como es lógico, las minorías de cada uno de los partidos están plenamente enteradas—, es la que nos lleva a solicitar este aplazamiento, si es que ello cabe en lo posible, dada la proximidad del plazo que existe para que la Diputación Permanente conteste al requerimiento del Juzgado.

El Sr. PRESIDENTE: Pudiera accederse a la petición que acaba de hacer el Sr. Velao en nombre de los tres grupos parlamentarios republicanos, sobre el supuesto de que el aplazamiento sea sólo hasta mañana, porque el plazo reglamentario para contestar la petición del suplicatorio deducida por el Juzgado número 3, de Valencia, expira el día 2. De no contestar antes de esa fecha, se estimaría que, automáticamente, quedaba denegado el suplicatorio; y ése no ha sido el propósito de la Comisión de suplicatorios ni seguramente lo será el de la Diputación Permanente de las Cortes.

El Sr. VELAO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. VELAO: En vista de las manifestaciones del Sr. Presidente, yo rogaría a toda la Diputación que accediera a aplazar la discusión de este asunto hasta mañana.

El Sr. LAMONEDA: En nombre de la representación socialista, y como miembro de la Comisión, que no suscribió ese dictamen, debo manifestar que nosotros no nos oponemos a ese breve aplazamiento; pero teniendo presente la circunstancia reglamentaria de que aquí vengan los suplentes, y en la posibilidad de que, por cualquier ausencia, el número de miembros de la Diputación Permanente mañana no fuera reglamentario, con lo cual recaería sobre nosotros una responsabilidad...

El Sr. PRESIDENTE: No; perdone el Sr. Lamonedada. Mañana la Diputación Permanente se reunirá con el número de representantes que acudan, sea cual fuere, porque no es reunión en pri-

mera convocatoria. Habríamos, no de terminar esta sesión y convocar otra, sino de suspender ésta, para continuarla mañana.

El Sr. **LAMONEDA**: Pues, siendo así, nosotros no nos oponemos a ello.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Se aprueba la propuesta formulada por el Sr. Velao? (*Pausa.*) Queda aprobada.

Se suspende, por lo tanto, la sesión hasta mañana a las doce en punto."

Eran las doce y cincuenta minutos.

A las doce y quince minutos del día 31 de Diciembre de 1937, hallándose presentes los señores Pascual Leone, Torres Campaña, Prat, Corominas, Santaló, Palomo, Tejero, Lamoneda, Montiel, González Peña, Vargas, Velao, Fernández Clérigo y Domingo, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: Se reanuda la sesión.

Está pendiente de discusión el dictamen sobre el suplicatorio del Sr. Lucia Lucia.

El Sr. **LAMONEDA**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **LAMONEDA**: Los miembros de la Comisión de suplicatorios discrepantes del dictamen de la mayoría hemos omitido el trámite de presentar voto particular por la circunstancia de que, en este caso, no procedía sino decir sí o no. Insistimos ante la Diputación Permanente en el punto de vista que hemos sostenido en la Comisión, pidiendo que el suplicatorio sea concedido para que el juez pueda seguir sus investigaciones en averiguación de si hay o no culpabilidad en el Sr. Lucia.

Más que el examen de los datos del sumario que se nos han remitido a la Comisión y las declaraciones de testigos o personas que han sido requeridas, a nosotros nos inspira, al colocarnos en esta posición, la circunstancia, que realmente es un buen indicio, de que el Sr. Lucia era, al mismo tiempo que jefe de la Derecha Regional Valenciana, vicepresidente de la C. E. D. A., organización política que ha intervenido en la preparación de la subversión y luego, materialmente, en la subversión misma. Nosotros no podríamos fácilmente explicar a la opinión pública, a los electores que nos han traído aquí, cómo no estimábamos que pudiera haber indicios de culpabilidad en el Sr. Lucia, tratándose nada menos que del vicepresidente de la C. E. D. A. El señor Lucia ha aportado cuanto ha podido en su defensa ante la Comisión; pero no nos ha explicado de una manera satisfactoria, por lo menos para nosotros, los que allí estuvimos en minoría, por qué, habiéndose normalizado el orden público en España y después de la presencia del Gobierno de la República en Valencia, no procuró ponerse en contacto con el Presidente de las Cortes, con el Ministro de la Gobernación, con el Presidente del Consejo, con alguien, en fin, que, garantizándole el respeto a su persona, le facilitase la incorporación a sus tareas de parlamentario y pudiese hacer evidente, con hechos, lo que parecía indicar

aquel famoso telegrama que tanto se esgrime, dirigido por el Sr. Lucia al Gobierno condenando la subversión.

El que el Sr. Lucia siguiera escondido en una casa de campo, a pesar de haber podido salir sin peligro para su vida, es indicio que nos parece de importancia. Pero aunque éste no existiera, como nosotros no obramos aquí en concepto de juzgadores, de jueces, sino de administradores de la inmunidad parlamentaria, siempre nos parecería que ningún caso sería tan claro como el del Sr. Lucia, vicepresidente de la C. E. D. A., para que permitiésemos al juez que averiguase, que profundizara en este asunto. Y si mañana el Tribunal Supremo, ante la inexistencia de prueba de culpabilidad del Sr. Lucia, lo pone en libertad, habrá cumplido, jurídicamente, con su deber, y nosotros, política y parlamentariamente, habremos cumplido con el nuestro.

Por todas estas razones, en nombre de la minoría socialista, y me parece que interpretando también el criterio de la fracción comunista (*El Sr. Montiel hace signos afirmativos.*), solicitamos de la Diputación Permanente que no apruebe el dictamen y que, por el contrario, conceda la autorización para procesar al Sr. Lucia. Nada más.

El Sr. **PRESIDENTE**: Se va a proceder a discutir el voto particular que verbalmente acaba de formular el Sr. Lamoneda en nombre de la minoría socialista.

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **COROMINAS**: El problema que plantea el caso del Sr. Lucia ante la Diputación Permanente es, a mi modo de ver y al de muchos compañeros míos, eminentemente político. Los problemas políticos creo que debería resolverlos la Diputación Permanente y no los Tribunales de Justicia. Eso, como punto de vista de carácter general. Pero nos encontramos aquí con que, aunque sea una cuestión política—y precisamente porque lo es—, hemos de procurar resolverla, de común acuerdo, los que constituimos el Frente Popular. Y la única condición por la cual no deberíamos llevar esta resolución al Supremo sería si, al dar nuestro voto, fuésemos a poner el problema en una situación irremediable.

Pero éste no es el caso. Hemos estudiado el asunto, conocemos el criterio de nuestros compañeros dentro de la Comisión de suplicatorios, y si hubiésemos de decidir aquí definitivamente la cuestión, en el orden jurídico, nos inclinariamos más bien por denegar el suplicatorio. Mas, como digo, no nos vemos en la precisión de resolver de una manera irreparable la cuestión, porque no se trata aquí ni de condenar ni de declarar inocente al Sr. Lucia, sino simplemente de si diferimos o no la resolución de la Diputación Permanente al Tribunal Supremo de Justicia.

Nosotros tenemos una fe absoluta en el acierto, en el espíritu ecuaníme, en el sentido afecto a la situación del Tribunal Supremo; creemos que éste ha de resolver en justicia, y que si el señor Lucia es inocente, como parece deducirse del simple examen que un abogado puede hacer del asunto, reconocerá su inocencia, habiendo nosotros de

jado simplemente de resolver el problema de carácter político que se plantea.

Este problema tiene dos aspectos: el político, que lleva en sí mismo, puesto que creemos que lo es, y aquel otro que tendría cuando, por la resolución de este problema, viniese a presentarse resquebrajado el Frente Popular. Y creemos que la cosa no es tan definitiva, tan irreparable, que mueva a los que formen parte de la Diputación Permanente a afrontar este peligro.

Parece, pues, que el asunto, para nosotros, está claro: dentro del orden jurídico, estudiado el problema, nosotros resolveríamos hasta allí donde nos fuera permitido resolver, y lo haríamos en el sentido de denegar el suplicatorio; pero la cuestión plantea un problema político, cual es el de presentar desunido el Frente Popular, en una situación que se ha debatido, que se ha llevado ya a la opinión pública, sobre la cual se han presentado pruebas, se han hecho gestiones y declaraciones públicas; y creemos esto de una gravedad tal que la importancia y la trascendencia del asunto en sí no permiten afrontarla.

Repito, por tanto, que si se tratase aquí de condenar o de declarar inocente a un Diputado, nosotros, ante el peligro de poner en discusión la vida o la libertad de un hombre que ha sido, en fin de cuentas, un compañero nuestro, quizá resolveríamos en el sentido de denegar el suplicatorio, pero tratándose solamente de someter a un compañero nuestro al Tribunal Supremo para que su gestión sea examinada, creemos que el asunto pierde esa trascendencia que pudiera tener y entonces no vale la pena de afrontar el otro peligro político de presentar ante la opinión pública el Frente Popular dividido en un asunto de esta clase. En tal sentido, nosotros, a pesar del dictamen que ha sido suscrito por compañeros nuestros, ante las manifestaciones hechas, no solamente dentro de la Comisión, sino aquí, creemos que debemos reafirmar con nuestro voto, al lado del de los otros compañeros del Frente Popular, la unidad de este Frente dentro de las actuales circunstancias.

El Sr. FERNÁNDEZ CLÉRIGO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. FERNÁNDEZ CLÉRIGO: Para hacer una manifestación exclusivamente de carácter personal, porque tratándose de una cuestión referente a materia de suplicatorios, aparte mi disciplina de partido y el acatamiento que siempre he prestado a los acuerdos adoptados, he de hacer presente esta opinión mía que, repito, es de carácter personal.

No soy partidario de la doctrina que cifra la concesión o denegación de los suplicatorios en la confianza que inspiran los Tribunales de Justicia. Los Tribunales de Justicia han de inspirar siempre confianza, y si ésta fuese sólo la razón, el suplicatorio, una vez pedido, sería concedido siempre y quedaría desvirtuada la esencia misma de la institución parlamentaria de la inmunidad y de su protección mediante el suplicatorio. Creo que el Parlamento examina en cada caso la objetividad del hecho delictivo y la subjetividad de los

indicios racionales de criminalidad que puedan existir respecto del presunto encartado que ostenta la investidura de Diputado a Cortes; y en este caso destacadísimo, a pesar del dictamen de la Comisión de suplicatorios, a mí me han hecho mella, me han hecho pensar profundamente los razonamientos expuestos por el Sr. Lamonedá, en representación de la minoría socialista.

No se trata de formar un juicio definitivo, como con acierto decía el Sr. Corominas, ni de formular una absolucón o imponer condena; se trata, sencillamente, de examinar si aquí puede haber algunos indicios racionales que induzcan a presumir la culpabilidad sobre la cual hace descansar el juez su petición de suplicatorio. Sean cuales fueren los antecedentes que haya tenido en cuenta la Comisión parlamentaria, es lo cierto que hay un partido político bien destacado como enemigo de la República e implicado en la rebelión, y en este partido político tenía un lugar preeminente y director el Sr. Lucía. Esto puede hacer presumir, en principio, sin prejuzgar la cuestión, la indiciaria intervención del mismo como elemento integrante de una organización absolutamente desafecta y enemiga del régimen, y si a ello se unen las demás consideraciones hechas por el señor Lamonedá respecto a la falta de colaboración directa en momentos en que el Gobierno puede prestar toda clase de protección a quien llegue a él en demanda de ayuda para prestar su colaboración a la misma obra gubernamental, puede todo ello ser tenido en cuenta para que, en definitiva, se abra el paso a los Tribunales de Justicia, no sólo por la confianza que los Tribunales inspiren, que esto sería una doctrina subversiva del amparo y de la protección de la inmunidad parlamentaria, sino por todas aquellas razones expuestas por el Sr. Lamonedá y que confieso han producido en mi ánimo huella suficiente para determinar mi voto en el sentido que solicita dicho señor y también el Sr. Corominas.

El Sr. VELAO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. VELAO: En nombre de la minoría de Izquierda Republicana no tengo más que decir sino que habíamos otorgado al Sr. Corominas nuestra representación para hacer las manifestaciones que ha vertido en la Diputación Permanente, por lo cual la minoría de Izquierda Republicana se adhiere a ellas públicamente, anunciando que votará la propuesta del Sr. Lamonedá.

El Sr. TORRES CAMPAÑA: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. TORRES CAMPAÑA: La representación de Unión Republicana se suma a las manifestaciones que acaba de hacer el Sr. Velao en nombre de Izquierda Republicana y reitera su adhesión expresa a lo manifestado por el Sr. Corominas.

El Sr. MONTIEL: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. MONTIEL: Aunque nuestro camarada Lamonedá ha hablado, en cierto modo, en nombre de la minoría comunista, considero obligado hacer constar expresamente cuál es el punto de

vista de nuestra representación en relación con este problema.

De acuerdo con lo que ha expresado el camarada Lamonedá y con lo que también han manifestado los Sres. Corominas, Fernández Clérigo, Vela y otros, este es un asunto esencialmente político, y, al enfrentarnos con él, nosotros hemos de tener en cuenta este aspecto fundamental; pero queremos añadir, a lo que aquí se ha expuesto, que entendemos debe concederse el suplicatorio, no porque nos lavemos las manos en este asunto para dejar que resuelvan los Tribunales o porque entendamos que desde el punto de vista jurídico hay razones que aconsejen dejar esta función a los Tribunales, sino porque creemos que, dada la sinificación política del Sr. Lucía, su condición de representante de las clases reaccionarias del país que han ayudado y han colaborado para provocar la sublevación y que hoy la están alimentando desde el otro lado de nuestras trincheras, este señor es un enemigo del pueblo español. Claro es que no pretendemos juzgarle, porque no es esa nuestra misión aquí, pero creemos que ante casos como éste, lo menos que puede hacer el Parlamento es no entorpecer la actuación que, por el camino de la Justicia, se siga contra hombres de esta clase.

Nosotros estamos de acuerdo con que se haya producido este fenómeno de que el fuero parlamentario recobre todo su valor tradicional. Ahora, cuando se trata de cierta clase de Diputados a los que no podemos despojar de su representación, lo que no podemos hacer, teniendo en cuenta la responsabilidad que en estos instantes críticos de nuestro país asumimos, es prolongar estos derechos hasta donde podemos evitar que se prolonguen.

Yo recuerdo que en una de las últimas reuniones del Congreso se planteó el problema de la reforma del Reglamento de la Cámara, reforma que se llevó a cabo en el sentido de que los Diputados que faltasen a cierto número de sesiones podían ser dados de baja en el Parlamento. Es probable que cuando esta reforma se aplique, el Sr. Lucía sea uno de los Diputados a quienes haya de hacerse objeto de la sanción. Y sería ridículo, desde el punto de vista político y revolucionario, que nosotros, pudiendo impedir que los derechos de Diputado del Sr. Lucía llegaran a cortar el proceso que contra él se sigue, consintiéramos que este proceso se interrumpiera.

La personalidad del Sr. Lucía es sobradamente conocida. No necesitábamos descubrir esa personalidad a través de los hechos que puedan figurar en el sumario, porque nuestra posición no es la de los jueces, que cumplen el aforismo de que "lo que no está en los autos, no está en la vida". Nosotros conocemos, por desgracia, la vida del Sr. Lucía y su actuación política. El Sr. Lucía ha sido Ministro de la República, además de vicepresidente de la C. E. D. A.; ha sido Ministro durante el bienio negro, ha sido Ministro durante la represión horrible que se llevó a cabo contra el pueblo español después de Octubre de 1934. Y nosotros no podemos olvidar todo eso cuando te-

nemos que dar nuestro parecer sobre la personalidad del Sr. Lucía.

Cuando se implantó la República se exigieron responsabilidades a todos los que habían sido Ministros durante la Dictadura, y, por el hecho de haber sido Ministros en aquel período, fueron condenados. Nosotros, pues, no tenemos por qué abrigar duda alguna para condenar a un hombre que ha sido Ministro durante el bienio negro. Todavía no se ha abierto ningún proceso de responsabilidades por la gestión política de aquel período; pero cuando se plantea la necesidad de enfocar la sanción que corresponda a un hombre como el Sr. Lucía, no podemos sentir duda de ninguna clase sobre este particular.

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: El Sr. Corominas tiene la palabra para rectificar.

El Sr. **COROMINAS**: Sin duda, yo no me he explicado bien cuando he querido exponer el criterio mío y el de otros compañeros de esta Diputación Permanente, porque si me hubiera explicado bien no habría tenido necesidad de rectificarme el Sr. Fernández Clérigo. (El Sr. Fernández Clérigo pide la palabra.)

Como van a constar estas palabras y podrían representar una definición de un criterio equivocado—criterio que me han hecho el honor de suscribir otras minorías—, necesito aclararlas.

No tengo la opinión de que nosotros hayamos de diferir ese asunto a la resolución de los Tribunales porque tengamos fe en la justicia de los Tribunales. No es eso. Digo que se trata de un asunto de carácter eminentemente político. Si fuese solamente jurídico, nosotros seríamos partidarios de denegar el suplicatorio; pero se trata de un asunto eminentemente político y nos encontramos entre tener que abrigar fe en los Tribunales o tener que resquebrajar la unidad del Frente Popular. Y ante esto, si por diferir a lo primero, hubiésemos de cometer una injusticia irreparable, quizá lo pensaríamos otra vez y quizá nuestra decisión fuese otra; pero como tenemos fe para esto en el Tribunal Supremo y tenemos en cuenta que no se trata de hacer algo definitivo, ante la poca importancia que entonces ya tiene el asunto, estimamos que no vale la pena de que vayamos a afrontar una división en el Frente Popular; una división que quizá no sea de fondo, pero bastaría que fuese de forma para perjudicar la situación actual.

En este sentido solamente he dicho yo que tenemos confianza en el Tribunal Supremo. La resolución que vamos a tomar es eminentemente de carácter político.

El Sr. **PRESIDENTE**: Tiene la palabra para rectificar el Sr. Fernández Clérigo.

El Sr. **FERNÁNDEZ CLÉRIGO**: No he pensado nunca en atribuirle al Sr. Corominas la manifestación de que se basase sólo la concesión del suplicatorio en la doctrina de la confianza en los Tribunales. Yo he dicho que esta doctrina no me satisface ni me convence; pero no se la he atribuido al Sr. Corominas, ni he tratado jamás de

rectificar sus palabras. Lo que únicamente quería yo hacer presente, al pronunciar las mías, de conformidad en absoluto con el criterio del señor Corominas y habiendo tomado parte con gran satisfacción en el acuerdo de que llevara la voz de nuestras minorías republicanas, era sencillamente mi criterio personal de que, además, las manifestaciones del Sr. Lamonedá habían producido honda mella en mi ánimo y que me parecía que, sin prejuzgar la cuestión, podían existir aquellos indicios a que el Sr. Lamonedá hacía referencia y que habían de servir de base a la petición de suplicatorio, y que ello me movía, con toda la confianza que tengo siempre en los Tribunales, y más en el Tribunal Supremo, al que

tengo la honra de pertenecer, a que el suplicatorio se concediese.

El Sr. **PRESIDENTE:** ¿Se aprueba el voto particular de la minoría socialista, defendido por el Sr. Lamonedá? (**Asentimiento.**) Queda aprobado. Consiguientemente, queda desechado el dictamen y concedido el suplicatorio.

Se comunicará al Tribunal Supremo a los efectos oportunos.

No hay más asuntos de que tratar.

Se levanta la sesión."

.Eran las doce y cincuenta y cinco minutos.

Rivadeneira, S. A. (Intervenido por el Estado).
Paseo de San Vicente, 28.—Madrid.